



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA LABORAL**

Medellín, noviembre 24 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-**024-2022-00304-01**  
Demandante: OFELIA DEL CARMEN MÚNERA  
Demandado: DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL DE SAN PEDRO SA,  
FABRICATO, COLPENSIONES Y LA AFP PORVENIR SA  
Asunto: AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

Dentro del Proceso Ordinario Laboral pretende la actora se declare que laboró para Fabricato a través de la filial DIVISA, entre el 13/03/1980 al 30/04/1994, y luego en algunas temporadas entre los años 1996 a 1998, empero solo fue afiliada al sistema de seguridad social en pensiones en la AFP Porvenir a partir de mayo de 1994, acusando tal afiliación como engañosa por parte del empleador.

Así las cosas, previa anulación de la afiliación a la AFP Porvenir y pago del cálculo actuarial a Colpensiones por el tiempo no cotizado, pretende el reconocimiento de la pensión de vejez, ello como beneficiaria del régimen de transición pensional con el pago del retroactivo pensional desde el año 2003, además se ordene a la empresa DIVISA a cancelar la sanción de que trata el artículo 65 del CST en tanto no se pagaron las cotizaciones en pensión y se declare la nulidad de una transacción que por el mismo asunto se realizó en un proceso previo (archivo N° 2)

Como parte del control preliminar, la A Quo en auto del 13 de septiembre de 2022 devolvió la demanda señalando una serie de imprecisiones que contenía el escrito genitor, solicitando: **a)** aclarar las pretensiones especificando cuál de las accionadas debe asumirla, cuáles se presentan como principales y/o accesorias; **b)** adosar la prueba de la previa reclamación administrativa adelantada frente a Colpensiones referente al pago de la pensión de vejez (archivo N° 4)

En respuesta a este requerimiento, la activa se pronunció frente a cada reparo, replanteó los hechos y pretensiones de la demanda informando el responsable de cada pedimento, los que además clasificó como principales y accesorios. En cuanto a la reclamación administrativa contra Colpensiones indicó que fue agotada el 20 de septiembre de 2022, adosando la imagen de la reclamación virtual (archivo N° 5)

**En auto del 3 de octubre de 2022 se rechazó la demanda**, advirtiendo que no se satisfizo el presupuesto de la previa reclamación a Colpensiones. Indicó que de cara al artículo 6° del CPTSS para iniciarse una acción contra esta entidad debe agotarse previamente este requisito, el que se cumple una vez se obtiene respuesta o transcurrido 1 mes sin una respuesta efectiva, condiciones que no se cumplieron.

Inconforme con la decisión, la parte actora propuso el recurso de apelación, exponiendo que en su sentir se incurre en un exceso ritual manifiesto, en tanto la solicitud de reconocimiento pensional fue elevada el 20 de septiembre de 2022 y negada por Colpensiones pasados 2 días. Además de forma previa, el 25/10/2021

se había pedido el traslado entre regímenes, donde la entidad aceptó la recepción de la solicitud, pero no brindó respuesta adicional.

Reprocha del despacho el exigir una condición de imposible cumplimiento en tanto dentro de un término de 5 días que lo fue para subsanar los requisitos formales de la demanda, no era podría correr el plazo de 1 mes a que alude el artículo 6 del PCTSS, lo que genera una violación al debido proceso por negación del servicio de administración de justicia frente a una ciudadana que presenta una condición de vulnerabilidad dada su edad (74 años) (archivo N° 8)

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 la activa presentó escrito el que reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

### **CONSIDERACIONES**

Atendiendo al objeto de apelación corresponde a esta corporación determinar si hay lugar al rechazo de la demanda por falta de cumplimiento de requisitos formales, en particular por ausencia de la reclamación administrativa de que trata el artículo 6 del CPTSS.

Para resolver los reparos, pertinente resulta remitirnos al concepto de reclamación administrativa consagrado en el artículo 6 del CPTSS que enseña que previo al inicio de acciones contra la Nación, las entidades territoriales o cualquier entidad de la administración pública habrá de agotarse un requerimiento ante la misma entidad.

Sobre el propósito de tal exigencia, la Corte Constitucional en sentencia C -792 de 2006 señaló que el presupuesto de la previa reclamación ofrece a la administración la oportunidad de pronunciarse sobre los reclamos, pudiendo enmendar aquellos yerros cometidos, evitando que se acuda a instancias judiciales. También se indicó que no se trata de una inhabilidad permanente para el ejercicio de la acción judicial,

en tanto se establece un término razonable de espera, que lo es de un (1) mes, y que transcurrido sin tener una respuesta de la administración, se entiende satisfecho el requerimiento, así indicó la Corte:

*De manera general puede decirse que la necesidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas ante los tribunales.*

(...)

*Esa previsión que obra en beneficio de la Administración Pública no puede convertirse, sin embargo, en un instrumento para que ésta eluda sus responsabilidades, ni constituirse en factor de indefensión de un administrado que, ante la falta de respuesta de la Administración, se vería imposibilitado para acudir ante la jurisdicción. Por ello, como factor de equilibrio entre la prerrogativa de la Administración y el derecho de acceso a la administración de justicia del administrado, la ley ha previsto la figura del llamado silencio administrativo negativo, por virtud de la cual, transcurrido cierto tiempo sin que la Administración responda, se entiende que la solicitud se ha denegado y a partir de ese momento el administrado queda habilitado para acudir ante los tribunales.*

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la CSJ respecto a la función de la previa reclamación señaló que además de un requisito de la demanda, esta comporta un factor de competencia, que debe verificarse para dar inicio a la acción laboral, pues en su ausencia, habrá de rechazarse, así indicó en sentencia de radicado 12221 de 1999.

Las anteriores interpretaciones jurisprudenciales permiten a esta Corporación concretar el propósito de la previa reclamación administrativa, la que más allá de un requisito formal de la demanda, comporta una etapa de autocomposición de la reclamación contra el Estado, que se entiende agotada ora con la respuesta efectiva, ora con el paso de un (1) mes de espera; reclamación que determina la competencia del funcionario judicial, no solo para efectos de dar inicio al trámite, pero además que delimita los aspectos sobre los cuales podrá pronunciarse el fallador, al igual que

sirve de hito temporal para contabilizar los eventuales efectos de la prescripción extintiva, en tanto el artículo 6° citado indica que “...*mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción*”

Ahora bien, en criterio de esta corporación la existencia de unos requisitos para la presentación de la demanda tiene como finalidad encaminar la acción judicial, establecer unos derroteros mínimos que faciliten el acceso a la justicia y minimicen la existencia de vicios que impedirían que se emita una decisión de fondo. Presupuestos que además deben encontrarse en armonía con el postulado constitucional de primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 Constitución Política), posición ésta que ha sido expuesta por la Corte Constitucional en sentencias de tutela, tales como T-950 de 2003, T-1091 de 2008, T-599 de 2009, T-264 de 2009, T-386 de 2010, entre otras.

Bajo tal entendido, considera esta corporación que, el rechazo de la demanda por ausencia de requisitos formales debe darse sólo si, tal ausencia implica un defecto insalvable para el trámite procesal, en tanto las diferentes exigencias dentro del trámite judicial procuran que estas se desarrollen de forma continua, sin irregularidades que impliquen retrocesos o impidan una decisión de fondo, dotando a las partes de la oportunidad de ejercer los correctivos necesarios, so pena de aplicar los correctivos o impedir el avance del trámite.

Con estas premisas se descende al **caso concreto**, donde la Sala se detuvo en el análisis de los aspectos objeto de reproche, concluyendo que no se cumplió con el deber de presentar la demanda con el lleno de los presupuestos formales, en particular no se presentó la previa reclamación administrativa con la cual se permitiera a Colpensiones conocer de las pretensiones que en su contra se adelantaban.

El escrito del 25 de octubre de 2021 que aparece instaurado por un profesional en derecho en representación de la señora Múnera se remitió a través de un canal que no era el adecuado, fue así como se generó la respuesta automática que informaba que el canal usado era de uso exclusivo para trámites que cursan ante la rama judicial y se instruyó a la parte a adecuar la actuación, haciendo uso de las vías on line que para tal fin tenía habilitada la entidad, oportunidad que ignoró la parte.

Requisito que tampoco se satisfizo con ocasión de la providencia que devolvió la demanda, pues pese a que se informa que el 20 de septiembre de 2022 se radicó una petición en la sede electrónica de Colpensiones, se desconoce su contenido íntegro, pues aquella imagen que se adosa con el recurso de apelación solo alude a un requerimiento de traslado de régimen pensional, lo que no comprende todos las pretensiones que frente a esta entidad se enuncian en el escrito de demanda, reiterando que es la reclamación administrativa un factor de competencia para el funcionario judicial y el parámetro para delimitar los aspectos objeto de debate.

Ahora, respecto a los reproches del impugnante al calificar el requisito como imposible de cumplir pues solo se le brinda 5 días, debe tenerse presente que la formulación y estructuración de la demanda no es un asunto que tome por sorpresa a la parte actora.

Para el caso que nos atañe, el escrito de demanda alude a una relación laboral ocurrida entre los años 1980 a 1994, y presentada la demanda en el año 2022 revela que fueron más de 28 años en los que la parte pudo confeccionar la demanda, acopiar los elementos de prueba y claro, agotar la reclamación administrativa en debida forma, sin que sea el juez quien deba instruir a las partes en la forma en que se acude al trámite judicial, sino que a través de los poderes de instrucción y dirección del trámite, los controla y verifica.

Así las cosas, sin que con la demanda se hubiera demostrado la previa reclamación administrativa, como tampoco se cumpliera en el término de subsanación de requisitos, en tanto no se probó el contenido de la reclamación elevada el 20 de septiembre de 2022, acertada fue la decisión de rechazo de la demanda, la que es confirmada por esta corporación.

Sin costas, toda vez que no se causaron.

Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA DE FORMA TOTAL LA PROVIDENCIA RECURRIDA.**

Sin costas en esta instancia, pues no se causaron

Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

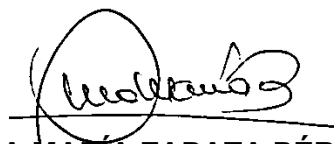
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 28 de noviembre de 2022